



*Colección Académica de  
Ciencias Sociales*

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



## COLOMBIA, ESTADO, CONFLICTO Y MODERNIDAD

**Mg Carlos Alberto Osorio**

Filósofo. Magister en Sociología. Docente Universidad Santiago de Cali. Docente Universidad del Valle. Email: [carlos.osorio05@usc.edu.co](mailto:carlos.osorio05@usc.edu.co), [carlos.alberto.osorio@correounivalle.edu.co](mailto:carlos.alberto.osorio@correounivalle.edu.co)





Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)

## COLOMBIA, ESTADO, CONFLICTO Y MODERNIDAD

PAG 27

Mg Carlos Alberto Osorio

### RESUMEN

En este artículo se ofrecen algunas líneas de interpretación sobre la comprensión de la relación entre modernidad, Estado y conflicto en Colombia. Se pretende mostrar cómo la experiencia de la modernidad es una experiencia postergada o incompleta por la manera en que la configuración misma del Estado desencadena factores estructurales ligados al origen y persistencia de un conflicto armado interno. Se hace una mirada del tratamiento que se le ha dado a ese conflicto y se derivan del mismo los trazos de lo que sería la postergación de la experiencia de la modernidad.

### INTRODUCCIÓN

¿Es la modernidad una experiencia en la que Colombia ha logrado insertarse efectivamente? Diversos analistas han intentado de diferentes maneras acercarse a esta pregunta. También en este texto se pretende abordarla, justamente desde el lugar en el que algunos teóricos han puesto la reflexión alrededor de dicho interrogante, ofreciendo algunas líneas de interpretación sobre la comprensión de la relación entre modernidad,

Estado y conflicto en Colombia. Se pretende mostrar cómo la experiencia de la modernidad es una experiencia postergada o incompleta y parte de esa débil entrada en la modernidad se corresponde con la manera en que la configuración misma del Estado desencadena factores estructurales ligados al origen y persistencia de un conflicto armado interno. Se hace una mirada del tratamiento que se le ha dado a ese conflicto y se derivan del mismo los trazos de lo que sería la postergación de la experiencia de la modernidad.

Rubén Jaramillo Vélez, filósofo colombiano, editor de la desaparecida revista Argumentos, habla de la experiencia de la modernidad a partir del discurso filosófico de la ilustración, como el advenimiento de la secularización. En materia política relaciona el discurso moderno que se despliega en América Latina con la influencia de las revoluciones industriales y burguesas. En materia económica relaciona la modernidad con la satisfacción de la necesidad de actualizarse a las exigencias del mercado mundial. El balance que hace este autor de la efectiva entrada de los países latinoamericanos en estas lógicas es deficitario. En los países hispanoamericanos las estructuras económicas y sociales se mantienen

#### Mg Carlos Alberto Osorio

Filósofo. Magister en Sociología. Docente Universidad Santiago de Cali. Docente Universidad del Valle.

Email: carlos.osorio05@usc.edu.co, carlos.alberto.osorio@correounivalle.edu.co



SECCIONAL PALMIRA



Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

más ligadas a las formas tradicionales imperantes en la colonia, en contravía con el discurso político de los profesionales de la política que es totalmente moderno. La herencia del absolutismo y sus secuelas provocan una modernidad de ruptura, una especie de ficción de modernidad (Jaramillo, 1998).

Hay unas élites en el continente que asumen el discurso de la modernidad y que lo impulsan políticamente. Su comprensión de la entrada en la modernidad significará también el impulso de un proyecto de nación excluyente, desconocedor de la diferencia, uniforme, que va a devenir en el desarrollo de estructuras de poder que configurarán un Estado que encarnará las condiciones para la existencia y permanencia del país en un prolongado y complejo conflicto armado interno. El pensamiento de los llamados próceres de la independencia, queriendo sustraer a la nación del "oscuro pasado colonial", va a pretender forzar la entrada en la modernidad, siendo la nación, como se anotó anteriormente, heredera de las estructuras impuestas por la colonización española y desconociendo las enormes posibilidades que la diversidad de orígenes y culturas de los habitantes del territorio ofrecía. Ya en la carta de Jamaica, Simón Bolívar menciona la idea de civilizar a los salvajes que habitan un territorio en donde propone se asiente la capital de la república conformada por la unión de Colombia y Venezuela. La sola idea de civilizar a quienes llama salvajes, da cuenta de un proyecto modernizador que pasa por la reducción del diferente y la homogenización de la diferencia. Este discurso revela la uniformidad en torno al

proyecto modernizador, la cual supone la anulación de lo diferente y su carácter antagónico. Este es un proceso similar al descrito por Herbert Marcuse en su caracterización de la sociedad construida en el libro *El Hombre Unidimensional*. Allí refiere la identificación de los individuos con el sistema que se intenta imponer como domesticación a partir de la represión. Para ello se tiene que desplegar sobre los individuos una serie de herramientas de dominación tendientes a la neutralización del hombre. La sociedad unidimensional pretende eliminar los conceptos más perturbadores desde la imposibilidad de definirlos en términos operacionales o conductistas. Se opera un acto de formación de la conducta que sirve para los objetivos del sistema dominante. En la esfera política se opera la convergencia de los opuestos hasta el punto de hacerse indistintos los discursos y las prácticas. Dicha uniformidad es camuflada bajo la bandera de la defensa contra el enemigo común. Su aparente amenaza mantiene ocultas las contradicciones (Marcuse, 1968).

Pese a este intento unificador en torno al proyecto de la modernidad y justamente por el carácter contradictorio de la experiencia de imposición, la realidad evidencia el choque entre el discurso modernizante y las dinámicas concretas de la sociedad. En materia política la consolidación de las repúblicas se da en el contexto de autoritarismos cercanos al absolutismo, de caudillismos, de insurrecciones, de fraudes electorales, de caciquismos (Jaramillo, 1998).

En el campo de las ideas, destaca la contradicción



existente entre una inteligencia que intenta promover las ideas del utilitarismo como antítesis del pensamiento católico español en un intento por incentivar el abandono del vínculo con el pasado colonial y dogmático. En esta lógica de pensamiento se dan intentos de reforma a la educación pública orientándola desde los valores de conducta civil. Esta corriente de pensamiento va a entrar en confrontación con permanentes tentativas de mantener una educación orientada desde la ideología conservadora y empeñada en suprimir las influencias extranjeras y retomar el pensamiento premoderno en conformidad con los dogmas y la moral de la Religión Católica (Jaramillo, 1998).

La modernidad exige ponerse a tono con las exigencias del mercado mundial. La economía en Colombia, durante mucho tiempo, aun habiendo entrado en la fase republicana, va a estar muy ligada a las formas impuestas por la colonia. El desarrollo de la economía va a continuar basado en la minería y no se va a conceder tanta importancia al desarrollo de la actividad agrícola y de la manufactura (Jaramillo, 1998).

### **Estado y bipartidismo**

La conformación del Estado colombiano atraviesa un tortuoso proceso en el que el conflicto está presente de manera constante. La forma de resolución de los conflictos apelando a la violencia no solo va a estar a la orden del día, sino que significa la instauración de un factor que con el paso del tiempo incide en el

fracaso del proyecto modernizador. Entrados en la república, después de la independencia, el intento de materializar la idea de Estado acorde a las exigencias de la modernidad va a ir acompañado de la elaboración y reforma casi que permanente de constituciones.

Algunos analistas ubican el intento modernizador en el periodo comprendido entre 1863 y 1886. Esto sin desconocer que ya desde la misma independencia se asume, como se ha anotado, la tentativa a contramano de poner en sintonía la nueva república con el credo de la modernidad de cuño europeo y con una fuerte influencia en la experiencia norteamericana. Nuestras primeras constituciones transitan entre el modelo francés y el modelo de filadelfia. Es, sin embargo, en el periodo conocido como el "El Olimpo Radical" donde la nueva construcción va a abogar por la consolidación de un Estado federalista que se enmarca en la reacción política a la herencia del centralismo colonial. En materia económica se plantea con fuerza la idea del liberalismo económico y en el campo de la educación la preconización de un modelo de educación laica. Se impulsa la política librecambista, provocando la amenaza de ruina a sectores de la economía como los artesanos y manufactureros (Jaramillo, 1998).

Coincide este momento con el aumento en la capacidad exportadora de la nación, con el inicio de la era de los ferrocarriles, el telégrafo. De la mano de estas transformaciones se da un factor que a la postre va a ser un determinante del viraje que toma el proyecto modernizador y es el fortalecimiento de un sector económico ligado a la tenencia de la tierra: el



fortalecimiento de los terratenientes (Jaramillo, 1998).

El llamado "Olimpo Radical" va a tener su cuarto de hora hasta la conocida época de la "Regeneración". Este periodo, en materia económica, está acompañado por el establecimiento de una banca nacional que pretende concentrar los recursos para atender el déficit fiscal y garantizar el monopolio de la emisión de papel moneda. Se plantea la creación de impuestos aduaneros y aranceles para productos extranjeros. La política económica se encamina hacia la industrialización, cuyo necesario antecedente es el establecimiento de privilegios y monopolios en algunos sectores. Esta industrialización va acompañada de la emergencia de una nueva clase social con unas demandas materiales ligadas a la llamada "cuestión social". Estamos ante el nacimiento del proletariado (Jaramillo, 1998). Tales privilegios al monopolio, ligados al sostenimiento de una clase terrateniente, unida a su vez con la producción cafetera van a desembocar en una concentración inequitativa de privilegios y riqueza que sumada al monopolio bipartidista del poder político derivan en el conflicto armado interno que hoy, cuando se escribe este capítulo, sigue sin resolverse.

Tanto el federalismo impulsado desde Bolívar hasta los liberales radicales, como el centralismo que se impone a partir de 1886, representan dos momentos necesarios para garantizar la consolidación y el predominio de unas élites económicas y su correlato político. Rafael Núñez afirma en 1885 que el país asiste al fin de las grandes diferencias entre los partidos políticos, sosteniendo que tanto las doctrinas liberales

como conservadoras son en su fondo idénticas y permiten la creación de un vínculo indisoluble cuya finalidad es servir como pedestal a las instituciones de Colombia (Leal, 1991). Esto, a mediano y largo plazo, va a traducirse en el monopolio bipartidista puesto al servicio de la consolidación de esas élites económicas y políticas que conducen, el que es a mi juicio, un fracasado proyecto modernizador.

La constitución de 1886 es recordada en el país por varias razones. Algunos plantean que es ante todo la consolidación en materia legislativa y de direccionamiento político de las ideas conservadoras. Se la recuerda también por haber durado más de 100 años, lo que es significativo en un contexto tan poco estable en materia de constituciones. Se la recuerda también por su difícil puesta en práctica hasta 1910 cuando se le introducen reformas tendientes a su materialización. Lo cierto es que es una constitución hecha por delegatarios escogidos por el partido conservador y la presidencia y que pese a durar hasta 1991 va a ser reemplazada permanentemente por artículos transitorios (Uribe, 1986).

De la constitución de 1886 no se puede decir propiamente que sea la más modernizante. Es una carta que en muchos sentidos desconoce libertades públicas y amordaza la prensa. Ya para la reforma de 1910 el descontento con la misma por parte de sectores del liberalismo es manifiesto. En 1936, a partir de una nueva reforma, se plantea la idea de la intervención estatal en economía, la función social de la propiedad, la libertad de conciencia, el recorte de prerrogativas a la iglesia católica, la libertad de





Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

enseñanza, el derecho al trabajo, el sufragio universal para la elección de Senado. Hay en el país un notorio cansancio con el carácter conservador que transpira la constitución de 1886. Para 1945, en este mismo espíritu, se impulsa una reforma que pretende la modernización de la labor del Congreso (Uribe, 1986).

En 1950 asume la presidencia Laureano Gómez después de ser candidato único como consecuencia del retiro del candidato liberal por cuenta de la situación de orden público, con hechos como el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Este conservador, fuertemente comprometido con el partido en una época convulsionada, va a ser un férreo opositor del liberalismo, del comunismo y un férreo defensor de ideas de derecha que algunos han juzgado como próximas al fascismo. Gómez intenta tramitar una asamblea nacional constituyente para la cual adelanta la conformación de una comisión de estudios constitucionales. En carta al parlamento y de cara a la reforma constitucional el presidente Gómez señala el peligro del sufragio universal argumentando que "En el anonimato de los electores o votantes gregarios tiene disculpa toda gestión equivocada o la ineficacia de cualquier iniciativa" (Uribe, 1986). Laureano Gómez no logra culminar su periodo de gobierno por problemas de salud. Quien lo reemplaza como presidente encargado debe entregar el poder al general Rojas Pinilla en una dictadura que no está mediada por la fuerza o el uso de las armas. El país, para entonces, vive una cruenta violencia entre liberales y conservadores. Laureano Gómez, pese a entregar el poder, va a tener fuerte injerencia en el gobierno.

El gobierno de Laureano Gómez es calificado por algunos autores como el intento de una dictadura de partido. Se le acusa de intentar cambiar al Estado desde arriba, desde el gobierno (Leal, 1991). La comisión de estudios constitucionales creada por este gobierno propone, entre otras cosas, el restablecimiento de prerrogativas a la iglesia católica, la restricción del voto de la mujer a la elección de concejos, el restablecimiento de la figura de la vicepresidencia, la censura previa para prensa hablada, la declaración del vínculo matrimonial indisoluble, declarar como traidor a quien atente contra el prestigio de instituciones y autoridades. Como parte de estas propuestas, de cara a la reforma constitucional, Félix Restrepo va a proponer el establecimiento de dos cámaras: una de elección popular y la otra gremial, conformada por representantes de profesiones o gremios que por su alta investidura y su misión social no se vean sometidos al voto y las vicisitudes del mismo (Uribe, 1986). Esto va en sintonía con la visión que Laureano Gómez tenía sobre el sufragio universal y los peligros del mismo. Es este un claro indicador del curso que va tomando el proyecto modernizador en manos de la clase política que se ha venido quedando con el monopolio de la representación, en el enrarecido escenario democrático propio del llamado periodo de "la violencia".

El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948 desencadena un episodio de guerra cruenta en el país. Esta muerte y las que se le suceden en el periodo de "la violencia" son la manifestación del tratamiento que se le da a las diferencias políticas.



Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)

Hace curso la práctica de la eliminación violenta, del aniquilamiento del contendor. El gobierno de Gómez es interrumpido por la dictadura militar de Rojas Pinilla, remplazada más tarde por una junta militar, después de la cual viene el Frente Nacional, que supone un reparto equilibrado del poder entre liberales y conservadores en los diversos ámbitos del gobierno y las ramas del poder. Valencia (1998) sostiene que en Colombia las guerras civiles terminan con una reforma a la constitución promulgada por el vencedor. El Frente Nacional se sella con un plebiscito en el que la ciudadanía valida el reparto de poder entre los señores de la guerra y la consecuente y trágica exclusión de cualquier otra fuerza política. Se consolida con fuerza de ley el monopolio bipartidista y con él la exclusión como argumento y combustible para el aún no resuelto conflicto armado interno.

El Frente Nacional significa entonces el deterioro de la democracia, y con ello del proyecto de inserción en la modernidad, a favor de los partidos tradicionales y las élites económicas ligadas a ellos. Durante el Frente Nacional el Estado hace presencia en medio de los ciudadanos a través de los partidos. Los beneficios que los ciudadanos demandan de parte del Estado llegan mediando la intervención de los partidos. Esta intermediación se materializa a través de líderes políticos locales y regionales. Este mecanismo se va desgastando en la medida en que se hace costoso e ineficiente y en tanto es objeto de cuestionamientos (Gutiérrez, 2006). Durante el Frente Nacional el clientelismo sustituye al sectarismo y la inserción violenta de los sectores rurales a la adscripción partidista. Este clientelismo va a ser, y es hasta

nuestros días, uno de los principales impedimentos en materia política para la modernización del Estado.

La violencia en Colombia posibilita una forma de ruptura con el orden establecido. Ese orden cerrado y clientelista del Frente Nacional. La violencia se origina en el cerramiento del régimen político. Colombia es un país marcado en los últimos años por la herencia de un conflicto social y armado que lleva en la escena más de 50 años y que ha dejado graves secuelas en la población en tanto ha cobrado muchas víctimas y producido daños irreparables en todos los campos de la vida, condicionando así el panorama de la acción política y de la acción social, lo mismo que el desempeño de la economía. El conflicto surge en medio de la inequidad social y la exclusión política; como resultado de la concentración del poder y los recursos económicos en pocas manos. En medio de este panorama se ha fortalecido el recurrir a la violencia armada como mecanismo para dirimir las diferencias y para ganar posiciones en el campo político.

El Estado colombiano ha venido construyendo un modelo que para la década del 70 ya habrá consagrado la definición del desarrollo capitalista del campo. La intervención estatal en la economía se concentrará en favorecer la industrialización y el comercio, buscando garantizar al capital privado las condiciones para su desarrollo. Para ello propugnará por la absorción de la mano de obra para la economía industrial. Se producirá, en aras de salvaguardar el modelo económico, comprometido con el capitalismo, la explotación humana que garantice unas tasas



*Colección Académica de  
Ciencias Sociales*

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

de rentabilidad crecientes y constantes. Se da una política económica que hace necesario un control del aparato estatal por fuerzas políticas identificadas con este modelo económico y que cierre la vía a modelos alternativos. De esta manera, quienes ejercen el poder político han favorecido la concentración de capital y poder gracias a un modelo económico basado en la extracción y explotación de recursos naturales, del cual se han beneficiado particularmente el capital privado y empresas transnacionales. Otra característica del manejo de la economía va a ser la incorporación de medidas de ajuste como la venta de empresas públicas y la reducción de la intervención estatal en los asuntos económicos. Al lado de la imposición de estas recetas económicas se asiste al crecimiento de las tasas de pobreza, de desempleo y de miseria, generando un clima de exclusión que es uno de los motores para la guerra.

Fruto de la guerra y gracias también a la incorporación en ella del narcotráfico, unos actores han ido ganando poder económico y político, favorecidos por altos niveles de corrupción en las organizaciones e instituciones estatales. Las víctimas de los crímenes que se cometen al amparo de la guerra se encuentran ante un clima generalizado de impunidad, derivado de la inoperancia del aparato judicial. Otro actor que se ha fortalecido junto con el narcotráfico es el paramilitarismo el cual se constituye desde su origen como mecanismo para consolidar poderes, favorecer intereses y exterminar maneras de pensar, violando de manera sistemática los derechos humanos y trasgrediendo el derecho internacional humanitario. Se reconoce la complicidad en su accionar de las

fuerzas militares que actúan, muchas veces al amparo de estados de excepción, favoreciendo intereses ligados a los actores en el poder. Hacia la década de los años 80 la violencia en el país sufre un fenómeno de privatización y descentralización, como consecuencia de la despolitización de la misma. La violencia va entonces a penetrar las ciudades (Valencia, 1998).

En el panorama político nacional se ha destacado la permanencia en el gobierno de sectores que han sido poco capaces de canalizar las esperanzas de la población y que han resultado poco asertivos en la integración de las distintas visiones y propuestas que se han ofrecido desde diversos actores para comprender y encauzar la nación. Varias décadas de eliminación violenta y cruel de los líderes y militantes de los movimientos sociales alternativos y de políticas de terror sobre sus bases, han exterminado o minado la capacidad organizativa de muchas fuerzas alternativas y han deteriorado las formas de expresión de la sociedad civil condicionando de esta manera su aporte a la democracia.

Lo característico en materia política en Colombia, derivado justamente de esa concentración del poder político y económico por parte de algunas élites, es que los gobiernos posteriores al Frente Nacional trataron de hacerse muy fuertes y de concentrar en la figura del presidente todo el poder estatal, por lo cual entraron en pugna muchas veces con el legislativo, protagonizado por unos partidos deteriorados y desconfigurados por el pacto de reparto del poder en el Frente Nacional. Algunos autores como Fernán González van a





Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)

referirse, en el análisis de la configuración del estado en Colombia, a la caracterización de la precariedad o debilidad del Estado.

González (2014) habla de la presencia de la violencia y la ilegalidad en la formación del Estado colombiano. En esta línea de interpretación postula que la ausencia de Estado en algunas regiones del país y la precariedad en su funcionamiento obedece a una presencia y formación diferenciada del mismo. En el análisis que introduce este autor se evidencia la ausencia de una verdadera democracia derivada de la exclusión operada por el bipartidismo. De otro lado se presenta la cooptación violenta de la institucionalidad. El aparato policial y de justicia queda socavado por la violencia. Entre las diversas capas sociales la desigualdad es muy notoria y frente a los actores que hacen manifiesta su inconformidad la respuesta estatal es la criminalización de la lucha social.

El bipartidismo en este modelo de Estado propio de las décadas del 70 y 80 se asume a sí mismo como mediador de conflictos siendo a su vez él mismo generador de violencia. No es entonces el Estado el encargado de la regulación de la dinámica social. Este papel en el bipartidismo lo asumen los partidos liberal y conservador, los cuales escinden la unidad simbólica de la nación a través de prácticas políticas basadas en el enfrentamiento y la transacción, en el clientelismo. Pero en el interior mismo de los partidos tampoco se va a dar esa unidad pues estos van a vivir una suerte de dispersión del poder entre múltiples élites, que desde su carácter civil subordinan a la sociedad (González, 2014).

El Estado va a tener visos de fracaso por su incapacidad de poner control frente a la violencia interna, por su pérdida de control territorial, por la pérdida del monopolio de la coerción, por la permanente desobediencia civil, la resistencia ciudadana al pago de impuestos y la desigualdad. Parte de esta imagen la da la penetración de la violencia en la institucionalidad ofreciendo la idea de un Estado criminal. En medio de este panorama las lealtades de los ciudadanos van a trasladarse a grupos armados ilegales o paraestatales (González, 2014).

La relación entre ejecutivo y legislativo ha estado mediada por el clientelismo, el cual ha contado cada vez más con el dinero proveniente del narcotráfico y con una manifestación local-regional del mismo que cuenta con la presencia, presión y control de grupos armados ilegales. Mientras los presidentes han tratado de gobernar aspirando a una cierta independencia respecto de los partidos políticos, estos se las han arreglado para mantener una buena porción del poder y pese a las estrategias desplegadas por los presidentes de turno para garantizar la gobernabilidad y en ocasiones un claro monopolio del mando, el país sigue aplazando la consolidación de una democracia sólida capaz de hacer frente en materia política a temas de primer orden como el conflicto armado, la seguridad en todos los ámbitos de la vida y la pérdida de confianza de los ciudadanos en la política (Restrepo, 2006).

El Estado colombiano ha tenido que vérselas con un país que mantiene una relativa estabilidad en materia económica pero que se mantiene en guerra.





Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

La estabilidad e incluso el crecimiento no han ido acompañados de un justo reparto de la riqueza. Como han sostenido algunos políticos, al país le va bien pero a la gente no. La relativa estabilidad en la economía ha sido gracias a la combinación de neoliberalismo, regulación e industrialización por sustitución de importaciones. La intervención estatal en la economía ha sido para favorecer los intereses de las élites, lo que demanda un ejercicio fragmentado y privatizado del poder. Este Estado ha dado un manejo clientelista a lo social configurando un tipo de partidos que se orientan no por el alcance del poder y los intereses sociales que se puedan derivar de ello, sino por la pugna y el reparto de beneficios ligados a la contienda electoral. La adscripción partidista de la sociedad obedece más a la tradición que a la convicción en tanto no hay proyectos políticos abarcadores de la sociedad. Los partidos no son mediadores entre el Estado y la sociedad y no hay una clara oposición (Archila, 2008).

Pese a que los gobiernos en las últimas décadas han pretendido un efectivo y fuerte ejercicio del poder por parte del presidente, se han encontrado con la férrea oposición a esta pretensión por parte del legislativo cuyo poder ha estado sustentado no tanto en la existencia de sólidos partidos con agendas fuertes que representen a los ciudadanos, sino por la primacía de los intereses particulares y clientelistas de quienes ocupan las curules en el congreso, en el cual han venido confluyendo sectores ligados no solo a las élites económicas y los partidos tradicionales, sino también a las mafias del narcotráfico y al paramilitarismo.

González (2014) analiza tanto la idea de captura del Estado, como la de captura invertida. La Captura es entendida como la instrumentación del aparato estatal por parte de actores ilegales. La captura invertida consiste en que los legales instrumentalizan ilegales para el logro en los escenarios de poder de sus intereses particulares. En esta lógica las élites regionales, fortalecidas en el Frente Nacional, se alían con actores ilegales ligados al narcotráfico y a grupos paramilitares, haciendo uso de la violencia para consolidar el poder de proyectos diversos unidos al manejo de réditos económicos. El país, por cuenta del bipartidismo, consagrado en el Frente Nacional, es el escenario propicio para la cooptación legal de la ilegalidad y viceversa.

La manera en que el Frente Nacional genera este escenario es justamente a partir del debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos. Las élites políticas regionales van a tener poder a partir de la manipulación de auxilios parlamentarios y del sistema de justicia entregando a los tradicionales "barones electorales" dinero y cuotas políticas. Siendo este el espacio para formaciones ilegales. En este fenómeno se va a dar como elemento característico la ausencia de modernización. Mientras el proyecto modernizador supone el fortalecimiento de un poder central, la alianza de "barones electorales" y actores ilegales supone la entrada en el poder nacional de intereses particulares que se van a oponer a este proyecto modernizador central.

De la época de la violencia y de la solución de la misma intentada por el Frente Nacional se deriva otro



Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

elemento de freno al proyecto modernizador, esta vez en la configuración misma de los partidos políticos. De la competencia política violenta que da lugar a las guerras civiles, de la socialización partidista por la vía violenta derivada de estas guerras, de la mediación de conflictos por cuenta de poderes locales surgirá una peligrosa fractura de partidos tradicionales. A ello se suma el narcotráfico, la economía de la ilegalidad y una permanente oposición a la Paz y a cualquier tentativa de modernización operada por el Estado desde el centro (González, 2014).

Los partidos políticos se han debilitado en buena medida por perder respaldo popular en razón de sus prácticas clientelistas y corruptas y en parte por su escasa capacidad de interlocución en lo programático y en la gobernabilidad con los jefes de Estado de turno. Estos últimos, tanto para hacerse elegir como para lograr gobernar, han acudido a alianzas interpartidistas sobre la base de la negociación de dividendos clientelistas. (Restrepo, 2006).

El orden público ha contribuido a fortalecer o debilitar la imagen de los mandatarios y su posibilidad de gobernar. Los gobiernos, pese a las estrategias desplegadas, logran defraudar las esperanzas de los electores. Los últimos gobiernos han tenido que hacer frente de manera más puntual a la agudización del conflicto armado con estrategias que consolidan el fortalecimiento de una política de paz que transita entre el diálogo y la confrontación armada (Restrepo, 2006).

Siendo el conflicto y la violencia realidades ligadas a la debilidad en materia política y a las desigualdades

en materia económica, el Estado no ha sido capaz de garantizar la seguridad, configurando otro freno a la modernidad. La política de seguridad ha estado llena de desaciertos. Durante mucho tiempo ha sido entregada al manejo de los militares, quienes la han desligado completamente del campo político. De esta manera hacen primar una visión guerrillerista que inscribe el conflicto en el marco de la lucha global contra el comunismo o el terrorismo. Los intentos de procesos de paz han estado desconectados de una política de seguridad. Cuando prima la visión militarista la política se torna más en plan de guerra que en política de seguridad. El narcotráfico sigue siendo combustible de la guerra. Los problemas sociales, que son base del conflicto, se mantienen irresueltos. La política antidroga, con todo y el apoyo de los Estados Unidos ha sido y sigue siendo un fracaso.

Ya se ha planteado que el manejo que han dado los partidos a la política en la nación los ha ido ilegitimando ante el grueso de la población. El descontento social no ha sido canalizado por los partidos políticos, que se apartan de los sectores sociales y de sus luchas, ante las cuales despliega la fuerza declarando medidas de excepción que han debilitado la democracia. La existencia de actores sociales sólidos no se ha estimulado y por el contrario su emergencia es perseguida al ser visto el actor social como un enemigo, construido desde fuera, en la lógica de la guerra fría. El Estado se muestra incapaz de institucionalizar los conflictos sociales. La desinstitucionalización de la acción colectiva de la sociedad y la precariedad de la misma amenazada por la guerra muestran la debilidad de los movimientos sociales (Archila, 2008).



Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

Los partidos políticos tradicionales a partir de la década del 70 entran en crisis de legitimidad por la corrupción y el clientelismo, junto a las instituciones del gobierno. La crisis se hace más palpable hacia finales del Frente Nacional. Ante la pérdida de respaldo popular se instaura un tipo de clientelismo en el cual los partidos optan por la negociación de la agenda del ejecutivo a cambio de partidas para los parlamentarios de su colectividad. De esta manera se fortalece un esquema de negociación de la gobernabilidad que mantiene vigentes a los partidos en sus distintos niveles locales y regionales en tanto les garantiza una cuota de participación política y de negociación de los dividendos económicos que el ejercicio del gobierno deja. El parlamento, más que salvaguarda de la democracia, se convierte en salvaguarda de intereses de los parlamentarios. Los gobiernos han querido ejercer el poder desmarcándose de los partidos y su tradición clientelista y ensayando formas de legitimación del poder basadas en el establecimiento de coaliciones interpartidistas, apelando al voto de opinión y al fortalecimiento de una imagen a través de los medios de comunicación en la opinión pública. El balance de este periodo, que va desde el fin del Frente Nacional hasta nuestros días, es un desprestigio tanto de la figura del presidente como del Congreso y una desconfianza creciente de los ciudadanos en sus gobernantes (Restrepo, 2006).

A la salida del Frente Nacional los partidos tradicionales se refugian en el fortalecimiento de liderazgos electorales que son el soporte de los triunfos en las elecciones presidenciales. Estos

liderazgos se van a desarrollar en los diversos ámbitos de la vida nacional, regional y local. El clientelismo y la corrupción están presentes en esta dinámica y el narcotráfico termina permeando los diversos niveles. Convertidos en escenarios de poder local y regional, alimentados con el dinero de las mafias, los partidos se van a tornar no en los canales de circulación de ideas y proyectos políticos, sino en fortines de votos, dinero y poder. Los partidos tradicionales se ven paulatinamente desconfigurados, sin muchas posibilidades en lo electoral y sin el pleno respaldo de las élites y de las capas medias de la población (Gutiérrez, 2006). En las regiones el poder acumulado por estos partidos, ligado a la dinámica clientelista, queda hipotecado a los intereses de los actores ilegales y delincuenciales. Lo político queda supeditado a los intereses de estos actores.

### **El Frente Nacional. Manifestación de crisis de modernización.**

Hay un antecedente del conflicto armado en Colombia del que ya se habló y es la llamada "violencia" que consiste en el enfrentamiento armado entre personas adscritas a los partidos tradicionales liberal y conservador. Es característico de este periodo el intento de suprimir por la fuerza el avance de las ideas contrarias. El Frente Nacional puede verse como una estrategia para poner fin a la lucha entre el partido conservador y el partido liberal y posibilitar una cultura democrática. Es entonces el precedente de este pacto político el encarnizado enfrentamiento entre estos dos sectores. Camacho (1974) coloca





Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

esta lucha en el plano de la oposición generada por la contradicción entre los modelos de acumulación defendidos por cada uno de estos sectores. El autor sostiene que la guerra es desencadenada por la búsqueda liberal de movilidad en la economía ligada a la tierra y por la respuesta conservadora de violencia institucionalizada. A este fenómeno se añade la incursión paulatina en el escenario político del creciente despertar de la conciencia revolucionaria. Desde el punto de vista de las élites y en atención a las exigencias del modelo que se va consagrando mundialmente en occidente, estos brotes de disidencia deben ser aplacados. Según este autor, para frenar las tentativas de rebelión se produce esta alianza bipartidista entre una burguesía industrial, representada por el partido liberal y una clase terrateniente representada por el partido conservador.

Por su parte, Sánchez (1991) describe el contexto de la llamada época de la violencia como un contexto en el que los contenidos políticos y sociales no pueden ser pensados en términos de rivalidad o de oposición sino en términos de la radical exclusión entre ortodoxia y herejía. Es un periodo en el que la regeneración social se busca mediante la demonización y el aniquilamiento del contrario. "Desde el poder se urdían verdaderas estrategias de homogenización dentro de las cuales la guerra y la política no podían pensarse simplemente en términos de victoria sobre el enemigo sino de eliminación física del mismo" (Sánchez, 1991, p. 30).

El Frente Nacional surge como intento de paz en el entendido de que esta puede lograrse si se

garantiza un equitativo reparto del poder entre los actores protagonistas de la guerra. En la pretensión de restablecer el orden social después de la guerra entre los partidos que originan la violencia, lo que con este pacto se logra únicamente es generar una apariencia de democracia restableciendo el poder para las élites tradicionales, levantando una barrera en contra de la movilización popular (Pécaut, 2003).

En apariencia, la violencia terminó con el establecimiento del Frente Nacional en 1958. Esta violencia, según Sánchez (1991), favoreció el ensanche del capitalismo agrario, derrumbó el poder hacendatario y consagró la prosperidad de los industriales. Menguó la sangrienta y virulenta oposición entre los partidos. De la competencia a muerte, pasaron al reparto programado y disimulado del poder. Este modelo habrá de reprimir cualquier tentativa que se salga de su esquema. El efecto fundamental de este proceso de maridaje entre los partidos tradicionales es descrito por Sánchez (1991) como el desdibujamiento de las identidades partidistas que da origen a una franja de lo social y lo político exterior al bipartidismo, frecuentemente criminalizada en la práctica política cotidiana.

La estrategia para eliminar a esta franja genera un nuevo ciclo de violencia que se inicia en 1965. El Frente Nacional creó las condiciones para que muchos sectores a los cuales la violencia había desconectado de las tradiciones populares contestatarias que se habían venido forjando en las primeras décadas del siglo, se afirmaran de nuevo en una visión de la política que ya no pasa de manera





Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

exclusiva por el reparto del poder sino que apunta a la abolición del orden establecido y a la instauración de nuevas formas de sociedad (Sánchez, 1991).

Para Pizarro (1989) el Frente Nacional acompañó el reparto exclusivista del poder y la burocracia con permanentes estados de excepción, lo que operó una democracia restringida, contraria al proyecto de la modernidad. El modelo de Estado característico del Frente Nacional y al que se oponen o hacen frente movimientos sociales e insurgencias armadas, posee unos rasgos que acrecientan estos factores de disidencia y exacerban la reacción represiva por parte del Estado.

El modelo de sociedad que hereda, causa, e impone el Frente Nacional está caracterizado por la concentración de la tenencia de la tierra, la marginación estructural de las mayorías en la economía monetaria y el monopolio elitista del poder para mantener las dos segregaciones anteriores. Al Frente Nacional se le adeuda la formación de una franja de marginalidad ideológica en la que caben todos los movimientos sociales, la insurgencia y las alternativas democráticas que se le opusieron en la contienda política y en la contienda electoral. Las estrategias utilizadas por el Frente Nacional para garantizar la eliminación política y fáctica de la oposición son: 1. Supresión de las alternativas de poder distintas: el caso de ANAPO; 2. Régimen de estado de sitio; 3. Represión de los movimientos sociales, que habrán de cargar con el estigma impuesto por el Estado de ser subversivos y de atentar contra la democracia lograda (Orozco, 1992).

En el Frente Nacional el Estado queda hipotecado

a una dirigencia socioeconómica que se ha logrado armonizar en un solo bloque dominante. Este Estado y este bloque se han venido alineando en el contexto mundial de oposición al enemigo comunista. Se ha alineado así en la contienda política de la guerra fría. El Estado despliega su violencia volcando la fuerza armada contra el "enemigo interno". Este proceso de salvaguarda del capital, de lucha anticomunista y de sometimiento a las directrices de los Estados Unidos que, según algunos analistas, en otros países se llevó a cabo a través de las dictaduras militares, en Colombia se hizo a través de la guerra y del Frente Nacional, el cual es, ante todo, una gran empresa nacional de desarrollo tendiente a evitar las revueltas (Rojas, 1974). Desde sus directrices económicas, condujo a la súper-explotación de la fuerza de trabajo, en función del modelo de desarrollo que privilegia a los poderosos y al capital extranjero (Camacho, 1974). En síntesis, además de contribuir al apaciguamiento de los odios entre los partidos tradicionales y a la canalización de los mismos hacia el enemigo comunista, que en la práctica se traduce en todo lo que se salga de la lógica de las élites que integran la dirigencia de los mencionados partidos, el Frente Nacional logra configurar un modelo de desarrollo económico comprometido con las recetas del libre mercado, la exportación, la privatización y los ajustes fiscales.

### **Panorama político después del Frente Nacional. El conflicto armado interno**



Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

El modelo político impuesto por el Frente Nacional llega a un estado de deslegitimación y de crisis que se aventura casi desde su mismo comienzo. Los gobiernos que le siguen a este periodo van a tratar de tomar distancia del mismo, pero en la práctica muchas de sus dinámicas van a ser fiel reflejo de las lógicas de negociación y reparto propias del pacto bipartidista.

Desde la década del 60 se comienza a proyectar la posibilidad de desmonte del pacto bipartidista. En la práctica se comienzan a introducir medidas que posibilitan una mayor participación de sectores sociales distintos a los partidos políticos tradicionales. En 1968 el presidente Lleras Restrepo comienza a plantear la necesidad de promover la participación de los campesinos en la definición de la política de Estado sobre el campo, para lo cual es importante fortalecer la organización de este sector de la población. En 1970 crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC con el objetivo de acelerar la reforma agraria y conjurar la amenaza comunista en el campo (Archila, 2003). En este gobierno se va a dar otro de los factores que retrasa el modelo modernizador y es la concesión de autonomía en el manejo del orden público para los militares. Por cuenta de esta autonomía y su consecuente influjo en la política de paz de posteriores gobiernos se va a postergar la solución política del conflicto armado. De otro lado y en materia económica este gobierno va a ponerse al servicio oligopolios como fin de la política (Leal, 1991).

La reforma agraria se impulsa en el país en el marco de la propuesta de "Alianza para el Progreso", es decir, de la política anticomunista; una iniciativa

para mitigar los posibles avances del descontento popular en el contexto de las encendidas revoluciones antisistema del continente. La reforma supone una avanzada en la redistribución de las tierras entre los campesinos y en la lógica de fomentar la utilización productiva de la misma. Sin embargo, las élites terratenientes, beneficiarias de políticas concentradoras de la tierra y ligadas a los partidos tradicionales van a reaccionar de manera organizada y muchas veces de manera violenta a los alcances democratizadores de esta reforma. La reacción violenta de los terratenientes reedita la fórmula de resolución violenta de los conflictos. El respaldo de los gobiernos a los terratenientes reedita una democracia hecha a la medida de las élites. El proyecto modernizador es una vez más aplazado por cuenta de la disputa por la tenencia de la tierra. Se genera nuevo combustible entonces para el conflicto armado interno.

El gobierno de Misael Pastrana va a sellar con el Pacto de Chicoral la rendición de la política a los intereses de las élites ligadas al gran capital. Este pacto es un acuerdo como concesión a los terratenientes en el que se pone freno a los avances en materia de entrega de tierras a los campesinos y se mantiene la defensa de la propiedad latifundista. En este gobierno además se castiga a los colombianos que desean adquirir vivienda, en beneficio de los especuladores, a través de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC. Los recursos derivados del crecimiento económico del país puestos al servicio de los terratenientes y la modernización de la producción agropecuaria y del enriquecimiento del



Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

sector financiero. Mientras esto sucede, al movimiento campesino agrupado en la ANUC se lo divide y se le da un tratamiento puramente represivo (Leal, 1991).

En 1974, sin desmarcarse de la dinámica del Frente Nacional, es elegido López Michelsen quien va a dar continuidad a las políticas de apertura económica impulsadas por el anterior gobierno. Va a ser un gobierno con una orientación elitista, que en 1975 promulgó una ley que respaldaba el proceso de concentración de tierras al favorecer a los terratenientes en sus conflictos con los campesinos (Leal, 1991). Ese mismo año finaliza la bonanza cafetera que había permitido una cierta estabilidad económica y se dan brotes de recesión. Este gobierno tampoco va a apoyar la reforma agraria y en cambio le va a apostar al impulso de reformas de corte más neoliberal que van a tener alcance sobre el campo y la dinámica de la agricultura. Con la cancelación de la reforma agraria el gobierno se gana el respaldo de sectores terratenientes. En lugar de la reforma agraria se impulsa el DRI (Desarrollo Rural Integral) que fortalece un modelo exportador basado en la gran propiedad agraria. En este periodo de gobierno se dispara la inflación y se da el paro cívico nacional de 1977 (Restrepo, 2006) uno de los más importantes en términos de movilización social en toda la historia del país.

Julio César Turbay Ayala gobierna entre 1978 y 1982. Su gobierno se caracteriza por ser de mayoría liberal y porque cuenta con el apoyo de las fuerzas militares y de las élites políticas y empresariales. El tema de la seguridad, ligado a la doctrina de defensa de la

seguridad nacional promulgada por los Estados Unidos, es encargado a las fuerzas militares, que van a gozar de grandes libertades para su acción. La seguridad se subordina a la lucha anticomunista de acuerdo a los parámetros de la lucha emprendida por el gobierno norteamericano (Restrepo, 2006). Este gobierno, desde el manejo que da al tema de seguridad, va a resultar particularmente represivo. Se van a violar, al amparo del estatuto de seguridad, los derechos humanos, pese a lo cual la movilización se mantiene.

En 1979 se da el estatuto indígena, fuertemente rechazado por los pueblos indígenas. Una señal más del modelo reduccionista y desconocedor de pluralidad propio de la visión de modernidad manejada por las élites desde el mismo momento de la independencia. Los indígenas van a rechazar el estatuto por considerarlo autoritario y por acusarlo de desconocer las condiciones socioculturales de los pueblos indígenas. En este mismo año la guerrilla, en especial el M19, se va a fortalecer a partir del robo de las armas del Cantón Norte y de la toma de la embajada de República Dominicana. Se crea, con el apoyo del narcotráfico, los militares y con financiación de terratenientes el MAS (Muerte a Secuestradores) (Archila, 2008), que va a constituirse en un impulso a la creación de grupos paramilitares. El paramilitarismo va a entrar de manera más fuerte en la escena del conflicto armado, mientras que el gobierno, en la disputa ideológica en que se desenvuelve el mundo y en el contexto de la guerra fría, se va a alinear cada vez más con los dictámenes de los Estados Unidos.



Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

En 1982 es elegido presidente Belisario Betancur, quien gobierna hasta 1986. La pretensión de Betancur consiste en lograr en un principio un gobierno de opinión que no tenga que consultar con los directorios de los partidos políticos. No obstante, su proyecto no tiene eco entre las élites políticas y los terratenientes por lo que se va quedando solo. En materia económica, para enfrentar una crisis en la industria, va a tener que acudir a medidas proteccionistas de algunos sectores de la economía, mientras debe hacer reestructuraciones de corte neoliberal entre las que se destaca la reducción del gasto social y el endeudamiento externo. En cuanto a la actitud frente a los dictámenes de los Estados Unidos, rechaza inicialmente su política antidrogas y la extradición, aunque finalmente se tiene que rendir a la voluntad del gobierno de Washington (Restrepo, 2006). Se destacan en este gobierno acciones en relación con la paz como el apoyo a la paz en Centroamérica y el intento de comenzar diálogos con las guerrillas nacionales, lo que significa que a estas se les confiere un estatus de actor político. La poca voluntad de las guerrillas y el débil encauzamiento de los diálogos con estas minaron la confianza de los colombianos en estos procesos (Restrepo, 2006). A esto hay que añadir que el presidente no logra eco entre las fuerzas militares y entre las élites del país en su política de paz, lo que hace más débiles sus iniciativas.

Virgilio Barco gobierna entre 1986 y 1990. Intenta, sin éxito, un esquema de gobierno de oposición quedándose sin consensos para gobernar. Durante su gobierno se desencadena la masacre de la Unión

Patriótica (UP), el partido que surge de la alianza de las FARC con el partido comunista en el marco de los diálogos de paz. Ya los paramilitares han ido ganando fortalecimiento y cuentan con la anuencia del ejército nacional y el respaldo de narcotraficantes y terratenientes. Se hace fuerte el narcoterrorismo y se acrecienta la lucha contra este con el apoyo de los Estados Unidos (Restrepo, 2006). En 1989, tras el asesinato de Luis Carlos Galán, el gobierno se decide a declarar la guerra a los narcotraficantes. Durante este gobierno se institucionaliza la figura de un comisionado de paz. Este gobierno se da en un periodo en el que el endeudamiento externo continúa, mientras la inflación sigue en crecimiento. Se desmontan la regulación de precios y los subsidios del café (Archila, 2008).

César Gaviria gobierna entre 1990 y 1994. Su administración se va a caracterizar por ser un gobierno de tecnócratas. La crisis política, el recrudecimiento de la violencia, el narcotráfico, la marcha de la economía, determinan el que se convoque la Asamblea Nacional Constituyente, la cual se instala con una votación inferior a la del Congreso de la República. La Asamblea Nacional Constituyente se convierte en una oportunidad política que intentan aprovechar los demócratas de los partidos tradicionales, las guerrillas desmovilizadas y sectores de izquierda, algunos grupos étnicos y miembros de movimientos sociales. Esta asamblea, por primera vez en la historia del país va a contar con la participación de los indígenas. Se destaca de este mandato la revocatoria del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones de parlamentarios.





Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

En materia económica se opta por un modelo de apertura económica que va a favorecer en su fase inicial un crecimiento sostenido de la economía. En materia de seguridad se da una política de sometimiento de narcoterroristas y la persecución a muerte de Pablo Escobar luego de su entrega y posterior fuga de la cárcel (Restrepo, 2006).

Ernesto Samper gobierna en el periodo 1994-1998. Asume una postura crítica frente a la apertura económica. En este periodo ya se experimentan los problemas económicos derivados de la apertura. La inflación aumenta, al igual que el desempleo. En el plano político la evidencia de la penetración de narcotraficantes y paramilitares genera una crisis a este gobierno. Se da la deslegitimación por parte de los Estados Unidos. El desprestigio del gobierno permite el fortalecimiento de la imagen internacional de las FARC. Es la época de la expansión del paramilitarismo y el fortalecimiento de las acciones coordinadas de las distintas vertientes de paramilitares (Restrepo, 2006). Samper intentó una reforma política nombrando una comisión que garantizara el buen funcionamiento de los partidos. La reforma no prosperó por la amenaza de los parlamentarios de instaurar un régimen parlamentarista en caso de que el presidente mantuviese la iniciativa de reforma (Gutiérrez, 2006).

Andrés Pastrana gobierna entre 1998 y 2002. Las buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos le permiten gestionar un paquete de ayuda militar (Plan Colombia) que va a ser determinante para el cambio de rumbo en el conflicto armado. Su gobierno cuenta con el apoyo inicial de las élites.

Sin embargo, una propuesta de revocatoria del mandato del congreso le generará un enfrentamiento con este. Ante los escándalos de corrupción entre los parlamentarios que formaban su coalición de gobierno, resucita una propuesta de referendo, con revocatoria del congreso. La propuesta de referendo pasó sin revocatoria en las comisiones primeras. Por su parte el partido liberal, que era mayoritario en el congreso, lanzó la propuesta de un "referendo social" en el que se preguntaba a los ciudadanos por su percepción de las políticas económicas del gobierno a la vez que proponía el anticipo de elecciones incluidas las presidenciales. Presidente y Congreso tuvieron que negociar y hasta allí llegaron los intentos de reforma vía referendo en este gobierno (Gutiérrez 2006). En materia económica se frena el crecimiento, hay recesión y el desempleo aumenta al 18%. La corrupción es escandalosa y la población se sume en un clima de pesimismo nacional que hace que aumenten las migraciones de nacionales hacia el extranjero (Restrepo, 2006).

En materia de paz este gobierno se lanza a negociaciones con las guerrillas lo que permite la internacionalización del conflicto armado. Las conversaciones de paz, sin embargo, no arrojan resultados positivos y fracasan, lo que sumado al aumento de la violencia y la inseguridad deteriora más la confianza de la población hacia este gobierno. Un importante revés es la inadecuada presentación ante la opinión pública del Plan Colombia. La manera en que se tramitó y se comunicó en las diversas instancias genera reparos de la sociedad civil, de la unión europea y de países latinoamericanos (Restrepo, 2006)





Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

Álvaro Uribe gobierna de 2002 a 2010. Su estilo de gobierno intenta saltarse la legitimación de partidos y clases dirigentes, apelando a la relación directa con los ciudadanos y al cultivo de su imagen ante la opinión valiéndose de los medios de comunicación. Durante este gobierno las relaciones internacionales y económicas se focalizan casi de manera exclusiva hacia los Estados Unidos. Las relaciones internacionales quedan hipotecadas a este país quien se convierte en el aliado estratégico y casi exclusivo de Colombia (Restrepo, 2006). Se impulsa un TLC que genera de parte del gobierno de los Estados Unidos una serie de exigencias para Colombia y que finalmente no se firma.

Uribe intenta mostrarse como un abanderado de la lucha contra la corrupción. Valiéndose de su popularidad impulsó una reforma política vía referendo que fracasa, lo que hace que esta tenga que ser adelantada en el Congreso. La reforma pretende la modernización de los partidos y la creación de un fuerte sistema de bancadas en el Congreso (Restrepo, 2006). Inicialmente la Corte Constitucional, pese a avalar el referendo, le retiró preguntas y exigió la modificación de otras. De otro lado algunos congresistas presentaron una reforma, similar en algunos puntos a la propuesta por el referendo y el parlamento la aprobó antes de salir (Gutiérrez 2006). En las urnas el referendo se cae.

Al amparo nuevamente de su popularidad este gobierno reforma la constitución a fin de permitir la reelección presidencial para lo cual se acude al antiguo esquema clientelista hipotecando la

governabilidad a las tradicionales fuerzas políticas. Se adelantan varias reformas a la constitución de 1991 con la pretensión de reducir el tamaño del Estado, el alcance de las altas cortes, el alcance de la acción de tutela, el papel del legislativo, el gasto, mientras se intenta fortalecer el rol del presidente en el gobierno (Restrepo, 2006).

Uno de los factores que más canaliza la favorabilidad hacia el presidente es el tratamiento dado al conflicto en el anterior gobierno y el fracaso de las negociaciones de paz. El gobierno de Uribe emprende una ofensiva política, diplomática y militar contra el terrorismo que personifican las FARC. Se opera un aislamiento internacional de esta guerrilla en sintonía con el discurso que se promulga desde el gobierno norteamericano a partir del 11 de septiembre de 2001. Desde está inserción en ese discurso antiterrorista la política de seguridad se encamina a la recuperación del control militar en vías y cabeceras municipales devolviendo la sensación de seguridad a los colombianos. Pese a los importantes golpes dados a las guerrillas durante todo este tiempo, se verifica que sus estructuras siguen vivas y su capacidad de hacer daño también.

Muchas de las políticas y de las maneras de actuar del presidente Uribe dan paso a un cierto fortalecimiento de la oposición en un sector de los liberales y en las alianzas establecidas por la izquierda. Uno de los más polémicos temas durante este periodo va a ser la reinserción, desarme y reencauche de los paramilitares. Sobre este proceso se generan en la opinión nacional e internacional



Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

muchas dudas. Sin embargo, un hecho verificable en estos años es la penetración paramilitar en el Congreso (Restrepo, 2006), lo que indica un cambio en la estrategia paramilitar y en la manera de estos actores relacionarse con la política y los políticos. Los paramilitares han apoyado la reelección del presidente Uribe y por esta vía han entrado dineros provenientes de la actividad ilegal a su campaña. El congreso en este periodo ha tenido la presencia de políticos que respaldan al paramilitarismo y que han sido respaldados por este. La política regional se ha paramilitarizado y narcotizado (Gutiérrez 2006).

La conducción política derivada de la concentración del poder y el manejo de la economía puesta más al servicio de las élites que del grueso de la población son elementos que ponen freno a la inserción en la modernidad y que van a devenir en un conflicto armado irresuelto justamente como consecuencia del manejo hecho por las élites en el poder. Ya se ha hablado un poco del matrimonio entre actores de la guerra y los partidos políticos tradicionales. Este proceso ha sido caracterizado como la alianza entre los intereses de las élites regionales y los señores de la guerra y la entrada de esta alianza a jugar en el escenario político nacional. Más adelante se verá como esa alianza va a constituirse en uno de los principales frenos para la solución de conflictos históricos como el ligado a la tierra y que da origen a la violencia guerrillera. Este será, como ya se ha enunciado, uno de los elementos de postergación de la experiencia de la modernidad.

### **El conflicto armado, crisis de modernización**

El proceso de la violencia en Colombia ha pasado por diversas etapas y ha logrado expandirse a todo el cuerpo de la sociedad (González, 2003). El conflicto armado involucra actores que se reclaman políticos y que buscan determinar la correlación de poder, bien sea por la fuerza de la ideología o de las armas. Pero este conflicto no es solo político. Las estrategias de los actores pasan también por el control de recursos económicos (Pécaut, 2003).

Uno de los actores en ese conflicto es la insurgencia armada, la cual puede ser vista como el producto de la forma en que se conduce la política en el país, en particular desde la impronta de los dos partidos tradicionales y las élites vinculadas a ellos. Algunos análisis sostienen que la insurgencia armada se inscribe en la lógica de conseguir por la fuerza la transformación de las estructuras sociales que consagran la exclusión política y económica. Pizarro (1989), va a sostener que en la década del 60 era inevitable la aparición de la insurgencia armada, que su protagonismo y legitimidad política se fortaleció por la postura represiva y militarista de la administración de Turbay a partir de 1978.

La guerrilla va a ser bien vista por algunos sectores que aprueban su oposición y combate a un gobierno mundialmente condenado por su desatención a los derechos humanos y que contribuye al deterioro de las condiciones internas del país, sumiéndolo en el vacío político. Desde este análisis se puede plantear que la violencia anti sistema que preconizan las guerrillas se inscribe en el contexto espacial y



Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

temporal de las secuelas que la violencia entre liberales y conservadores deja. Es incluso en las zonas donde ha sido fuerte esta confrontación en donde la violencia guerrillera va a encontrar condiciones para desarrollarse (Pizarro, 1989). Este mismo autor sostiene que estas condiciones sociales hacen que segmentos de la población sean susceptibles a encontrar en la guerrilla una opción política. De igual manera, el abandono del Estado en varias zonas del país o su presencia puramente represiva en ellas va a permitir que las guerrillas se consoliden. También la crisis de la izquierda legal y su poca capacidad de interlocución entre el Estado y la sociedad colocan a la insurgencia armada como una alternativa para quienes, con ideas radicales, pretenden un cambio en el orden social.

Pécaut (2003) analiza el fenómeno de la violencia en Colombia relacionándolo con el conjunto de la dinámica política de la nación. Sostiene que en Colombia, a pesar de existir la apariencia de una relativa estabilidad en materia política, la democracia no es ni suficientemente sólida ni suficientemente vinculante. Colombia carece además de unos acontecimientos cohesionadores en torno a los cuales se genere movilización popular. A cambio de esto se han institucionalizado formas de negociación y acuerdo entre los intereses y las fuerzas políticas que terminan por suplantar los consensos y la cohesión. No existen en el país elementos simbólicos que generen adhesión, vínculos, en torno a la idea de Estado y nación. Los elementos de cohesión de los ciudadanos en relación con el Estado son muy precarios y pasan por la mediación de los partidos y

su lógica clientelista. No hay vínculo en torno a la idea de Estado de derecho. El ciudadano no se siente con derecho a reclamar su participación y el respeto de la integridad de su condición de ciudadano. Lo que existe es una relación de favor y clientela, entre el ciudadano y los bienes y necesidades. Los derechos se burlan. Las elecciones, escenario privilegiado de la participación, se arreglan en sintonía con las lógicas de poder y favores en que se mueven las regiones y los partidos.

La ciudadanía queda despojada de su contenido y se negocia en el contexto de relaciones desiguales determinadas por el clientelismo. Esta lógica hace débil la movilización social. Los partidos son los únicos canales de demanda y la represión es la estrategia de contención de los intentos de reclamo por fuera de estos canales. Colombia, en el contexto del continente, es el único país que no conoce movilizaciones de carácter nacional que lo vinculen en torno a imaginarios comunes de ciudadanía y derecho. Hay entonces aquí un factor condicionante del recurso a las armas y a la ilegalidad como canal político. La exclusión política en un escenario tan precario de identificación de la población y al lado de la exclusión económica ofrecen un caldo de cultivo para fermentar la vía de la confrontación armada (Pécaut, 2003).

Otro elemento determinante del sostenimiento del conflicto armado es el tipo de presencia del Estado en el territorio. En el país hay zonas de desafiliación social que generan formas de afiliación en torno a los grupos armados. El proceso de migración y colonización genera espacios lejos de las autoridades,



Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

que demandan unas formas de dirimir conflictos, al carecer de mediaciones institucionales. Muchas de estas zonas de migración son además las que se han orientado hacia la economía ligada a la producción de sustancias de uso ilícito (Pécaut, 2003).

Hay además una tradición de legitimación de formas ilegales de tramitar los conflictos y las necesidades, que también legitima la violencia. La violencia es un recurso frecuentemente utilizado en los conflictos agrarios y laborales. Desde el Frente Nacional se ha demostrado que el uso de la violencia puede conducir a obtener fines políticos. El Frente Nacional, como pacto de repartición entre los actores de la guerra en la época de la violencia, permite que la transacción aparezca para suplir la presencia del Estado. También se han llegado a aceptar prácticas ilegales y de facto para determinar las correlaciones de poder. Las elecciones se compran, se presionan, se arreglan. Las normas jurídicas son utilizadas para validar estados de excepción. El recurso a la violencia se da en el contexto de la validación de esta lógica de las transacciones. En el contexto de la ausencia de elementos simbólicos de cohesión en torno a la ciudadanía y el Estado, en medio de una ausencia del Estado y del derecho, en donde se valida toda suerte de transacciones en condiciones de desigualdad y el poder se negocia, el recurso a la violencia aparece como el único que actores desiguales pueden usar por igual (Pécaut, 2003).

El recurso a la violencia se extiende en el tiempo y parece ir despojando de sentido la idea de una "institución de lo social" desdibujando el sentido

de pertenencia a la sociedad. La violencia aparece como inscrita en el orden mismo de las cosas en el país. Sin embargo, la comprensión de la población sobre la misma parece transitar por variaciones de interpretación. En el periodo de la primera violencia esta podía leerse perfectamente bajo la relación amigo-enemigo. En las fases recientes de la violencia esa relación es cada vez menos evidente y se hace más frecuente el tener que construir tal relación (Pécaut, 2003). Tras la finalización del llamado socialismo real y de las transformaciones en el mundo a partir de la caída del muro de Berlín, las guerrillas colombianas se han ido transformando. El marxismo se torna para ellas más que en su norte político, en una clave de análisis de la realidad. Sin embargo, sus discursos se van nutriendo de relatos nacionalistas, antiglobalización y populistas. El acceso a la economía de lo ilegal fortaleció además la capacidad de las guerrillas de sostener en el tiempo la guerra y su presencia en el escenario nacional (Ortiz, 2006).

El conflicto armado de las dos últimas décadas es, si no el mismo, heredero de la violencia que se da entre 1947 y 1958. Está violencia se constituye en un escenario que sirve como crisol para las guerrillas. Allí se da el encuentro entre la última fase de la confrontación violenta entre liberales y conservadores y el surgimiento de movimientos insurgentes de inspiración marxista. En la década del 60 surgen nuevos grupos que se van a matricular ideológicamente en las diversas corrientes del marxismo, alternando su discurso con un populismo receptivo entre los campesinos, pero que van a conservar un eje político estratégico derivado de la experiencia de la violencia





Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

lo que da como resultado un comportamiento híbrido en estos grupos (Ortiz, 2006).

### **Política de seguridad, bloqueo a la paz: el más notorio síntoma de postergación de la modernidad**

La política de paz, ligada al tema de seguridad, ha sido señalada en este trabajo como una consecuencia de la misma conformación del Estado. Si en materia política la exclusión de alternativas y la concentración del poder en unas élites camufladas en partidos cada vez más fragmentados e indistintos ha sido la forma de asumir la democracia, la consecuencia necesaria es la modernización incompleta, como lo sostiene Leal (1991). En lo económico la política se ha puesto al servicio de la concentración de tierras y riquezas. Estas son solo dos de las causas del conflicto armado, pero son además factores explicativos de la pervivencia del mismo por cuenta de políticas de paz construidas sobre el desconocimiento del contendor como actor político y sobre la sostenibilidad de los factores de exclusión que detonan el conflicto.

En muchos de los gobiernos expuestos, el tratamiento al conflicto privilegia una salida militar. En el gobierno de Turbay se crea el llamado (Estatuto de Seguridad Nacional). Esta opción, por lo militar, sigue la doctrina de la seguridad nacional impuesta desde Estados Unidos en el marco de su lucha contra el comunismo (García, 2006). El manejo de la seguridad, como ya se mencionó, es entregado a las fuerzas militares y estas, gozando de las libertades que se les confieren,

van a cometer muchas violaciones a los derechos humanos contra la población civil, en el marco de la lucha antisubversiva.

Betancur promovió una solución política al conflicto a partir de la propuesta de un diálogo nacional que pretendiera la participación de las diversas fuerzas políticas del país. Buscó, además, tramitar en el Congreso una ley de amnistía y conformar una comisión de paz para adelantar los diálogos con la guerrilla. Estos diálogos se quedan prácticamente estancados y limitados a una tregua pactada con los más importantes grupos guerrilleros FARC, EPL y ADO y algunos sectores del ELN. La política y la propuesta de paz del gobierno no contaron con el suficiente respaldo de todos los sectores sociales del país. Algunos de estos, como los militares, los partidos, los gremios e incluso la iglesia emprendieron una campaña de oposición al gobierno y su política de paz. El gobierno, pese a haber ofrecido la idea de un proceso de paz que incluyera reformas sociales, no logró contar con el consenso de las diversas fuerzas sociales y políticas del país en el nivel local y nacional. El diálogo de paz careció del suficiente respaldo político (García, 2006).

Barco hereda la política de paz del anterior gobierno. En su mandato se va a lograr el único modelo exitoso de negociación. Un modelo de negociación parcial, con agenda limitada. Fue un proceso con poca participación de la sociedad y con mucho direccionamiento por parte del ejecutivo. Se pretendía la integración de las zonas pobres y marginadas del país y así quitar respaldo o base social





Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

a la guerrilla. Esta política de paz tiene la pretensión de limitar la visibilización política de las guerrillas. El principal logro en la iniciativa de negociación con el M19 fue el intercambio de paz por democracia y la consolidación de un modelo de negociación exitoso frente a grupos pequeños y débiles en la correlación de fuerzas frente al Estado (García, 2006).

Gaviria asume el mismo modelo de negociación implementado con el M-19 para la negociación con el EPL, PRT y Quintín Lame. La exigencia de tregua, la concentración en campamentos controlados por el ejército y la no participación de la sociedad civil. Los grupos que se desmovilizaron lograron participar en La Asamblea Nacional Constituyente que fue utilizada como elemento de presión hacia los grupos insurgentes y como mecanismo de consenso nacional incluso frente a los acuerdos de paz. Para el gobierno, después de la constitución no eran necesarias más reformas, para las FARC y el ELN estas reformas seguían siendo necesarias, además ellos no participaron en la elaboración de la nueva constitución (García, 2006).

Samper heredó el problema de unas guerrillas muy fortalecidas y de una criminalidad exacerbada por el tema del narcoterrorismo. Pese a tratar de consolidar una propuesta de paz, su gobierno se vio desgastado con el proceso por infiltración de dineros del narcotráfico en la campaña electoral, lo que lo sumió en una crisis de legitimidad que le impidió maniobrar ante los sectores políticos que abogaban por la salida militar al conflicto (García, 2006).

En el gobierno de Pastrana se van a dar dos

tendencias contradictorias. Por un lado están los diálogos con las FARC en una zona desmilitarizada. Por otro lado el fortalecimiento militar del Estado gracias al aumento de recursos y de ayuda militar de los Estados Unidos para la confrontación con las guerrillas y el narcotráfico. El plan Colombia supuso un apoyo para esta iniciativa de modernización de las fuerzas militares y de adaptación de las mismas a los desafíos en que las colocaban las guerrillas. La idea de fortalecerse militarmente supone la apuesta por una presión que conduzca a la desmovilización. Sin embargo, entre las cúpulas militares y el gobierno no se dio la suficiente coordinación para combinar ambas estrategias en una apuesta conjunta hacia la paz. La autonomía de la cual históricamente gozaban las fuerzas militares para la conducción de los temas de seguridad impidió el desarrollo de una estrategia integral por parte del gobierno para derrotar a la guerrilla y conducirla a la desmovilización (Ortiz, 2006).

La política de paz tuvo muchos vacíos. Desmilitarización de territorio sin veeduría y control. Agenda excesivamente amplia. Fallas en la concertación con los militares. Insuficiente movilización social en torno al mismo. Negociación en medio del conflicto. (García, 2006). La ruptura del proceso de paz con las FARC obedeció a dos tensiones del mismo: la zona de distensión y los grupos paramilitares.

Durante el gobierno de Uribe no se avanza en la paz con las guerrillas ya que su promesa de campaña y su estrategia de seguridad pasa por pretender la rendición de las mismas. El plan patriota,



continuación del plan Colombia, es la estrategia para hacer manifiesta la superioridad militar del Estado colombiano frente a los grupos ilegales. Va de la mano con la política de paz. Otra vertiente de la política de paz es el avance en el cuestionado proceso con los paramilitares que va a conducir a la firma de un acuerdo para la desmovilización de los mismos al amparo de un marco jurídico especial y sobre el cual también se han levantado innumerables críticas.

El gobierno de Uribe entra a considerar a la insurgencia como terrorista. Se apuesta por una salida militar del conflicto supeditando las negociaciones a la desmovilización y rendición del oponente. La política de paz se basa en la idea de que en Colombia no hay conflicto armado interno sino una amenaza terrorista (García, 2006). La política de defensa y seguridad democrática prometió la restauración del control territorial y la seguridad de los ciudadanos.

El proceso con los paramilitares va a mantenerse en la lógica planteada por el gobierno de solo abrir posibilidades de negociar con quienes cesen el fuego. A través de la iglesia católica de las regiones en las que hay fuerte accionar paramilitar se comienzan acercamientos con los líderes de estos grupos. Se modifica la ley para permitir dialogar con actores sin reconocimiento político (ley 782 de 2002). Luego del cese al fuego de diciembre de 2002 comienza entre este año y el siguiente una fase exploratoria de acercamiento con estos grupos, cuyo informe es avalado por el gobierno. Comienza una fase de negociación en Santa Fe de Ralito - Córdoba en julio de 2003, donde se establece como objetivo

la desmovilización de todos los paramilitares para diciembre de 2005. Un año después se acuerda una zona de ubicación de los grupos paramilitares en Tierralta Córdoba. Se acuerda con la oea una misión garante y de verificación al proceso de paz para corroborar que se dé la desmovilización y el cese al fuego (García, 2006).

La agenda de negociación con los paramilitares evidencia que lo que se está pactando es la desmovilización de un actor armado que en lugar de oponerse está cerca del gobierno, ya que no es necesario incluir en la negociación temas en relación con lo social o lo político, sino solo lo relativo a las condiciones jurídicas de desmovilización. Los paramilitares se sienten representados por el gobierno Uribe, de alguna manera sienten que ya su lucha no es necesaria en virtud de la política de este gobierno en materia de defensa de los ciudadanos. Lo que se negocia entonces son las garantías para su desmovilización. Por ello el punto central de este proceso es el marco jurídico en el que se haga la desmovilización evitando a toda costa que tengan que responder penalmente por todos los crímenes cometidos y por sus vínculos con el narcotráfico. Este es el papel de la Ley de Justicia y Paz, fuertemente criticada en el ámbito nacional e internacional, en particular por organizaciones de derechos humanos. Se plantea que con dicha ley se estaba librando a los paramilitares de responder por sus crímenes y por su carácter de rendición ante las mafias terroristas. Desde muchos sectores se piensa que tanto la ley como el proceso son cómplices de la impunidad y legalización del narcotráfico y sus



Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



dinámicas en diversas regiones del país y que no desmontan el paramilitarismo como fenómeno social y político. Por la forma de este proceso se advierte la posibilidad de surgimiento de nuevas estructuras del paramilitarismo ligadas al narcotráfico.

Otro elemento a tener en cuenta durante este periodo y ligado a este proceso de desmovilización es la intervención cada vez más expresa de los paramilitares en la dinámica electoral de la nación. Si bien en muchas regiones históricamente han ejercido presión sobre los votantes, es cada vez más manifiesta su intencionalidad de pisar la arena política (García, 2006). Manifestación de ello es el aumento de procesos penales contra parlamentarios acusados de tener nexos con los paramilitares que se traducen en el ingreso de dineros de la mafia en las campañas políticas, en presión sobre los votantes en sus zonas de influencia y en la comisión de crímenes contra personas contrarias a las lógicas de poder imperantes en las regiones de influjo de los paramilitares o los parlamentarios en cuestión.

La política de paz en medio de la guerra y sin el respaldo de amplios sectores evidencia una parcial voluntad de paz. La imposibilidad de negociar aspectos centrales del origen mismo del conflicto armado evidencia la voluntad de las élites colombianas de no ceder ni en lo político ni en lo económico algo del capital que durante mucho tiempo y gracias justamente al modelo de Estado imperante han logrado acumular.

## Conclusiones

En los últimos dos gobiernos, pese a los logros en materia de seguridad, la paz sigue siendo una importante deuda, evidenciada en la ausencia de una política de paz integral. Es decir, la realidad de la paz sigue siendo la misma que en los periodos analizados desde 1978: La solución militar. En el anterior gobierno la guerra se consideró como mecanismo exclusivo para el fin de la guerra. En el presente se combina una estrategia de paz en medio de la guerra que ya ha evidenciado en el pasado no resultar del todo exitosa.

Las fallas de las diversas iniciativas de paz mencionadas tienen que ver con pretender que se puede dar una solución militar a un conflicto que va más allá de lo puramente militar. Otra gran falla es el aislamiento de los diversos sectores sociales del escenario directo de las negociaciones. La otra gran falla es pretender que el fin último de la negociación es la desmovilización de un actor. Es lícito enunciar que estas son justamente las características del actual proceso de negociación con las FARC. Los diversos sectores sociales están aislados del escenario de las negociaciones, sobre todo los sectores sociales y populares. Se dialoga en medio del fuego, lo que supone un claro distanciamiento entre lo que pretende la mesa de diálogo y la política de seguridad por parte del Estado en lo que se constituye como una clara amenaza para el proceso mismo. En este momento es clara por parte del gobierno la pretensión de reducir el alcance de este proceso a la desmovilización. Ya vimos como por



Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)



SECCIONAL PALMIRA

estas razones han fracasado las anteriores políticas de paz, de allí que sea posible esperar de la actual política un nuevo fracaso que en efecto no conduzca a la paz. Mientras tanto la violencia estructural y la guerra van a seguir desangrando el país, de la mano con el crecimiento de la economía ligada a la ilegalidad y en el escenario del fracaso de la política mundial antidrogas.

Se ha planteado al considerar el origen de las guerrillas y su posicionamiento en el escenario político nacional que en buena medida estos grupos se justifican a sí mismos en la confrontación con un Estado represivo y excluyente. Las guerrillas se inscriben en la dinámica de hacer oposición por la vía armada y lo hacen de esta forma al considerar que los canales democráticos han sido capturados y cerrados por las élites económicas y políticas instaladas en el poder y representadas en los partidos tradicionales. El respaldo de la población les viene por la sintonía con ese discurso en contra de la represión de los gobiernos y de la exclusión económica y política. En la medida en que la guerrilla muta ligada a la economía de lo ilegal el respaldo de la población les viene también de su carácter de avanzada de la colonización campesina y de su favor y control frente a la economía de la coca.

La Asamblea Nacional Constituyente que crea la nueva constitución de 1991 en Colombia es presentada como resultado de procesos de paz. Una expresión popular mediante un voto por fuera de la formalidad electoral sirve de pretexto para que se convoque a las urnas a los colombianos para elegir

a quienes han de modificar la constitución. A las guerrillas que por entonces participan en procesos de desmovilización se les concede participación directa en dicha asamblea, se les plantea entonces a las FARC y al ELN como el escenario de canalización de sus demandas en materia política. Pero la Asamblea Nacional Constituyente se hace sin ellos.

Pese a la importancia de esta nueva constitución en materia de derechos y de generación de mecanismos de participación ciudadana, lejos estamos de haber superado con ella las llamadas causas objetivas del conflicto como la exclusión en lo político y lo económico y la represión como estrategia para anular la oposición, sin ser estas las únicas causas del conflicto aunque si algunas de las más notorias. En el origen del conflicto aparece la ausencia de una democracia verdadera y vinculante como se ha señalado en este trabajo. Pero los procesos de paz adelantados hasta el momento y la nueva constitución como pacto de paz y punto de llegada de dichos procesos no logran generar una mayor democracia.

En el país sigue existiendo exclusión en materia económica y política. El modelo económico que se asume a partir del periodo presidencial en el que se redacta la constitución es el modelo que sigue las recetas del neoliberalismo y que ha generado pobreza y desplazamiento en el sector agrícola en Colombia. Los productores agropecuarios por cuenta del modelo económico de libre mercado y por cuenta de la guerra han venido abandonando en los últimos años sus tierras dejándolas a merced de monocultivos en manos de agroindustriales





beneficiarios de la política económica. La demanda de las guerrillas de una reforma agraria integral no solo no se concreta sino que la forma de tenencia y explotación de la tierra se torna más excluyente y la guerra, con la participación de narcotraficantes, paramilitares y terratenientes, hace más difícil las condiciones de los pequeños y medianos trabajadores de la tierra. Si bien la constitución es presentada como un acuerdo de paz, la realidad es que no está ligada ni a la paz ni a la superación de las causas estructurales del conflicto. La constitución se convierte en un mecanismo de transformación de la ley en manos de las élites tradicionales que son quienes se toman las curules.

Ha habido de parte de las élites en el poder un permanente freno a la paz cuando esta supone el reconocimiento del otro como actor político. Han funcionado solo los procesos en los cuales se logra la desmovilización de los actores en armas a cambio de poco o nada. El freno a la paz entendida como transformación de las estructuras excluyentes es, como ya se ha mencionado, un freno a la experiencia de la modernidad.

El mismo sistema político y la configuración del Estado se convierten en obstáculos a la paz. Justamente la debilidad en la modernización de las estructuras políticas configura ese obstáculo. El clientelismo bipartidista en gobiernos como el de Betancourt que hacen una apuesta por la negociación deja sin respaldo social y político el proceso. En el gobierno de Barco sucede algo similar. Su iniciativa de paz se queda sin partidos de respaldo en la medida en que no es clara la existencia de un partido de gobierno: el liberal,

que cumpliera el papel de respaldo a la iniciativa de negociación. Las facciones en competencia, que es en lo que han venido mutando los partidos, preocupadas más por el usufructo del poder como herencia del clientelismo propio del Frente Nacional no se la juegan por un proceso sin réditos personales.

El que no existan estos partidos que se la juegan por consolidar la paz como fruto de la negociación es señal de la ausencia de una democracia moderna. Un partido de gobierno requiere disciplina, jerarquías operantes e ideologías. Lo que se ha dado en Colombia, según la experiencia descrita, son estructuras de articulación clientelista ejecutivo-legislativo que no permite una fluida gobernabilidad y por ende no logran vehicular las transformaciones que requiere la paz.

Los diversos intentos de hacer política por fuera de los tradicionales sectores ligados o herederos del pacto bipartidista han sido y son excluidos e incluso aniquilados. La experiencia del asesinato, la amenaza, la estigmatización y la condena a quienes hacen política desde la refutación del sistema de cosas que impera en el país es una muestra de la voluntad de mantener un Estado funcional a unos sectores que, como se anotaba al comienzo de este trabajo, sostienen una ficción de modernidad que dista mucho de estar a la altura de las exigencias de una verdadera democracia.

La modernidad de ficción construida por las élites políticas y económicas pretende seguir poniendo lo político al servicio de lo económico. La modernización queda así subordinada al desarrollo de unos sectores en detrimento de las mayorías. La idea de secularización





Colección Académica de  
Ciencias Sociales

ISSN -e: 2422-0477

Vol. 3 No. 2

Suplemento (2016)

ideológica es sustituida por el afán de acumulación.

La función en Colombia del proyecto modernizador ha sido la creación de un Estado capitalista en el que, por cuenta del bipartidismo y sus sucedáneos, actuando por medios clientelistas, la clase política crece y se encierra en sí misma para tratar de perpetuarse. Con la garantía de supervivir como casta, la clase política apuntala la continuidad de un sistema apropiado para la economía dominante.

Con este modelo de Estado, con estas prácticas políticas, con este modelo económico amparado en la corrupción que lo defiende, difícilmente se podrá aproximar este país a la paz. Las negociaciones con las guerrillas y su potencial salida de la política por la vía armada nos pondrán en un escenario de posconflicto en el que el conflicto central e histórico tendrá que estar a la orden del día pues de lo contrario la guerra será siempre una posibilidad. Será imperante completar el proyecto modernizador en aras de la consolidación de una democracia real y esta es una tarea urgente de la política en el posconflicto. La paz es la tarea del posconflicto.

### Referentes bibliográficos

Archila, M. (2008). *Idas y venidas, vueltas y revueltas, protestas sociales en Colombia 1958 -1990*. Bogotá ICANH. CINEP.

Camacho, A. (1974). *La Encrucijada Del Frente Nacional*. Bogotá, Punta De Lanza.

García, M. (2006). *De Turbay a Uribe: sin política de*

paz pero con conflicto armado. En F. Leal [Ed.]. *En la encrucijada Colombia en el siglo XXI* (pp. 479-512). Bogotá, Colombia: Norma.

González, F., Bolívar, I., & Vázquez, T. (2003). *Violencia política en Colombia: de la nación fragmentada a la construcción del Estado*. Bogotá, Colombia: CINEP.

González, F. (2014). *Poder y violencia en Colombia*. Bogotá, Colombia: CINEP.

Gutiérrez, F. (2006). *¿Más partidos?*, En F. Leal [Ed.]. *En la encrucijada Colombia en el siglo XXI*. (pp. 147-170) Bogotá, Grupo Editorial Norma.

Jaramillo, R. (1998). *Colombia la modernidad postergada*. Bogotá, editorial Temis.

Leal, F. (1991). *El Estado colombiano ¿crisis de modernización o modernización incompleta?*, en: Melo, J.O (Ed), *Colombia Hoy Perspectivas hacia el siglo XXI*. Bogotá Siglo XXI.

Marcuse, H. (1968). *El hombre unidimensional*. México: Joaquín Mortiz.

Ortiz, R. (2006). *La guerrilla mutante*. En F. Leal [Ed.]. *En la encrucijada Colombia en el siglo XXI* (pp. 323-356). Bogotá, Colombia: Norma.

Pécaut, D. (2003). *Violencia y política en Colombia, elementos de reflexión*. Medellín, Colombia: Hombre Nuevo.

Pizarro, E. (1989). *La guerrilla y el proceso de paz*. En G. Gallón [Ed.]. *Entre movimientos y caudillos* (pp. 247-260). Bogotá, Colombia: CINEP / CEREC.





*Colección Académica de  
Ciencias Sociales*

ISSN -e: 2422-0477  
Vol. 3 No. 2  
Suplemento (2016)

Restrepo, L (2006). ¿Hacia el reino de los caudillos ilustrados? Los gobiernos colombianos como actores políticos. En F. Leal [Ed.]. En la encrucijada Colombia en el siglo XXI (pp.27-49). Bogotá, Grupo Editorial Norma.

Rojas, H. (1974). El Frente Nacional, Ideología Y Realidad. Bogotá, Punta De Lanza.

Uribe, D. (1986). Estructura constitucional para el cambio. Bogotá, Publicaciones Senado de la República.

Valencia, A. (1998). Violencia en Colombia años ochenta y reforma constitucional. Cali, Universidad del Valle.